

Palabras de apertura de Enrique Santos Calderón en el Encuentro Exploratorio

La Habana, Cuba 24 de febrero de 2012

PALABRAS DE APERTURA

Por cuestión de generosidad y de edad, más que dignidad o gobierno, mis compañeros de delegación han solicitado que yo diga unas palabras iniciales en este encuentro exploratorio.

De nuestro equipo soy, en todo caso, el que más tiempo lleva en estos ajetreos. Desde 1982, en el gobierno Betancur, fui miembro de la Comisión de Diálogo con el M-19 y el Epl, y asistí a la primera reunión oficial con este último grupo en el municipio cordobés de Pica Pica. Por ese tiempo, aunque no como miembro de comisión alguna, también estuve en La Uribe, donde tuve largas conversaciones informales con Jacobo Arenas y Alfonso Cano.

Luego, fui testigo de la tensa firma de la tregua con el M-19 en Corinto, Cauca, y años después, de la consolidación del acuerdo con el Epl en Pueblo Nuevo, Antioquia.

En época de tregua con las Farc, en el 87, viajé a Remolinos del Cagúan a la instalación de un Consejo de Rehabilitación, en una misión presidida por Iván Márquez, por las Farc y Carlos Ossa y Rafael Pardo, por el Gobierno Barco. Recuerdo que pernoctamos en el campamento del Frente Catorce que dirigía Jorge Briceño, con quien discutí al otro día sobre el fenómeno de los cultivos de coca y lo que él llamaba la “narcoproducción” que caracteriza a esa zona.

Durante esos años el Estado Mayor de las Farc, que creo era de cinco o seis miembros, y en ocasiones Jacobo Arenas individualmente, dirigieron varias <<cartas abiertas>> a la columna <<Contraescape>> , que yo escribía en EL TIEMPO, y mantuvimos francas e interesantes polémicas públicas sobre los avatares que sufría el vapuleado proceso de paz.

También con el Eln tuve intercambio de cartas abiertas – sobre todo con Nicolás Rodríguez <<Gabino>> - a raíz del atentado de este grupo a un poliducto en Machaca, que carbonizó a medio centenar de mineros pobres y sus familias.

Con Gabino y miembros del Comando Central del Eln me reuní posteriormente en la Serranía de San Lucas, a donde viajé, junto con un grupo de directores de medios, a solicitarle al Eln que dejara de secuestrar periodistas para transmitir sus comunicados. Accedieron, y esa práctica cesó.

En la zona de despeje del Cagúan estuve dos veces, aunque no como miembro de mesas o comisiones. Desde el desaire de las FARC a Pastrana, y de la <<silla vacía>> de Marulanda, dije que no le veía futuro a ese proceso. Pero fui invitado en una ocasión por Alfonso Cano a su cambuche cerca de San Vicente y en la otra por Joaquín Gómez a Los Pozos. Querían conversar y discutir conmigo y lo hicimos durante largas horas. A ambos les reiteré que las Farc habían rechazado a los colombianos y que iban a elegir a Álvaro Uribe. No pareció importarles.

No quiero, en fin, fatigarlos con más recuentos personales de mis itinerarios a través de ese laberinto que ha sido la búsqueda de paz en Colombia, que ha dejado en el camino una enrevesada arquitectura de toda suerte de comisionados, comisiones y comités, de paz y de diálogo, de negociación, de conciliación o de verificación, de treguas y ceses al fuego...

He sido, pues, testigo directo de veintinueve años de este proceso, que ha sido interminable, pero que debe y tiene que terminar. Porque es mucha la sangre derramada, muchas las esperanzas frustradas y mucho lo que, entretanto, ha cambiado. Un sentido elemental del realismo nos exige entender el nuevo entorno en el que hoy nos movemos: internacional, regional y nacional.

Pareciera innecesario, por lo evidente, resaltar las profundas transformaciones que se han dado en los últimos diez años. Digamos, desde que se puso fin a los diálogos del Cagúan.

Para comenzar, en el ámbito internacional. Particularmente en el terreno jurídico, con las facultades de la Corte Penal Internacional y la jurisprudencia cada vez más explícita sobre crímenes de lesa humanidad y los severos límites a las amnistías. Es este un tema terriblemente complejo y delicado, pero igualmente insoslayable, que podrá desarrollar con más detalles y conocimientos de causa el jefe de la delegación, Sergio Jaramillo.

Un entorno global radicalmente alterado, además, luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y caracterizado por una manifiesta intolerancia a acciones que puedan asimilarse a terrorismo político.

En el plano nacional, hay que tener en cuenta, porque también es inocultable, un clima de opinión beligerantemente adverso a cualquier repetición de experiencias como las del Cagúan. Más aún, diría yo, a la posibilidad misma de que el gobierno colombiano dialogue una vez más con la guerrilla. Preocupante, porque un Estado no puede renunciar a buscar la reconciliación nacional. Pero muy real.

No es este un estado de ánimo artificial, producto de manipulaciones mediáticas. Creer esto es auto engañarse. Me hace pensar en las multitudinarias manifestaciones callejeras de aquel 4 de febrero de 2008, las más grandes en la historia del país. Contra la violencia, el secuestro y - ¿cómo desconocerlo? - las propias Farc. Minimizar que millones de personas

salgan al mismo tiempo a la calle a gritar las mismas consignas; verlo como simples manipulaciones de arriba, es considerar a esos ciudadanos como despreciables títeres.

La hostilidad a un acercamiento guerrilla-gobierno es un sentimiento real, presente además en todas las encuestas y sondeos. Y, muy palpablemente, en las posiciones públicas de los sectores políticos que alimentan este sentimiento y quisieran bloquear desde ya todo camino de diálogo.

Basta leer los escritos de un intérprete de estas posturas, José Obdulio Gaviria, quien hace poco le reprochó al presidente Santos que este <<no podía aspirar a nueve millones de votos, pero desentenderse de la guerra frontal contra los terroristas>>; que era <<impensable que abandonara el lenguaje de la confrontación con el “enemigo social y armado” para poder ganar la adulación de los apaciguacionistas>>.

Así son las cosas. Juan Manuel Santos se juega una carta arriesgada y peligrosa. Conozco a mi hermano, es un audaz y toma riesgos. El que nos ocupa es grande y puede tener imprevisible costo político para él, mayor en todo caso que para ustedes.

Pero está dispuesto a asumirlo – por algo estamos aquí – y tiene el mandato y capital políticos para hacerlo.

En la medida, eso sí, en que encuentre disposición. Y en esta reunión se trata de que averigüemos si se puede, o no, vislumbrar una salida al conflicto armado. Para utilizar una expresión hasta hace poco proscrita del lenguaje oficial. Y aunque este gobierno bien puede durar ocho años, no va a durar mucho tiempo esperando a ver si hay disposición. Por eso hay que aprovecharla excepcional coyuntura en la que estamos.

Es mi visión, y la del Gobierno, de que hay una singular ventana de oportunidad, que puede ser la última.

Voy a ser totalmente franco con ustedes. No me imaginé esto, no lo vi venir. Mi sorpresa es doble porque, como deben saber, nunca me identifiqué políticamente con mi hermano Juan Manuel. Incluso tuvimos no pocas contradicciones y fricciones.

Pero ¿cómo no reconocer realidades tan de a bulto? El viraje en la política exterior, el destete con posturas del uribismo, la búsqueda de un nuevo marco político, la actitud autocrítica como Estado frente a abusos del pasado, la voluntad de corregir injusticias históricas...

Hay realidades que no puedo desconocer. Y por algo estoy aquí, plenamente identificado con el propósito de diálogo del Gobierno, a pesar del escepticismo creciente que, sobre la vida y la condición humana, me acompaña en la tercera edad.

Pero sería muy inconsecuente con lo que he pretendido ser – un crítico de la opresión y la injusticia – si ahora me cruzara de brazos. Ante lo que veo como una circunstancia excepcional, que podría precipitar reales cambios estructurales a nuestro país.

Coyuntura que demandará esfuerzos mancomunados y alianzas posiblemente insólitas para traducirla en hechos irreversibles. Si Alfonso Cano estuviera aquí se burlaría, diciendo que estoy haciendo <<santismo-leninismo>>.

Pero, retomando el hilo, más allá de los factores adversos antes mencionados, el contexto regional es favorable: Venezuela, Brasil, Bolivia, Ecuador, Perú...

Y en el plano nacional, como decía, ha surgido un nuevo ambiente político y se han tomado iniciativas trascendentales, que sería absurdo desconocer. Las leyes de reparación de víctimas y restitución de tierras, por ejemplo, con todas sus implicaciones políticas y sociales, que van a la matriz del conflicto colombiano. Esta iniciativa ha generado profundas resistencias, que aún no han salido a flote plenamente, y el gobierno requerirá de sólidos apoyos políticos y sociales para neutralizarlas. Y para garantizar una aplicación eficaz de estas leyes.

En las zonas mismas, donde ha de operar la restitución de tierras, el Estado tendrá que jugarse a fondo, con la ley y con las armas, para impedir que el campesinado sufra un nuevo despojo.

Por otra parte, la ley ha despertado un gran entusiasmo nacional y creo podemos estar doblando una dolorosa página de nuestra historia. Y podríamos hacerlo con o sin ustedes.

Sería mejor con ustedes. La esencia de su lucha ha estado conectada al problema agrario, a la proclamada defensa del campesinado sin tierra. ¿Por qué no entender la relación entre lo que las Farc han planteado y lo que está sucediendo?

A todos nos duele la inequidad y la injusticia; el despojo y la violencia. Es la inmensa mayoría de colombianos la que quiere superar este estado de cosas. No solamente ustedes y nosotros, aunque es importante ver las conexiones posibles entre la agenda de las Farc y la del Gobierno. Todo esto es importante captarlo, aquí y ahora.

También en el frente internacional la coyuntura es crucial. En lo político, lo que ocurre en el contexto regional confirma cada vez más la validez para la izquierda de lucha política legal y electoral.

En Europa, donde estuve a fines de junio, me impactó el juicio que se adelantaba en la Audiencia Nacional de Madrid contra el exdirigente de la Eta, Arnaldo Otegi, procesado tras el atentado de Barajas, que supuso la ruptura de tregua y conversaciones entre Eta y el Gobierno español.

Otegi, máximo dirigente sindical de la izquierda vasca y ex portavoz de Batasuna, sostuvo que precisamente a raíz de ese atentado había roto con Eta e insistido en la necesidad de poner fin a la violencia y la lucha armada.

En su juicio hizo planteamientos que quiero citar aquí:

- Una bomba nos destroza la estrategia diseñada y nos deja sin credibilidad por varias generaciones.
- Romper con la violencia era necesario para ampliar la base electoral del voto nacionalista. No necesitamos aparato militar y no es posible una acumulación de fuerzas suficientes para alcanzar nuestros objetivos si se mantiene la lucha armada. No porque sea un capricho nuestro, sino porque las fuerzas sociales y políticas que tienen que sumarse al proyecto dicen que NO.
- Los sectores que no tienen argumentos políticos necesitan desesperadamente que la violencia se haga presente. Nosotros que sí tenemos argumentos, necesitamos que desaparezca irreversiblemente de nuestro país. Seguir con la lucha armada es un suicidio político.

Esto lo planteó hace unas semanas uno de los más destacados líderes de la izquierda radical vasca, quien sostuvo que el cambio de estrategia no significa que hayan renunciado a sus objetivos: el de <<un Estado vasco en Europa, construido desde la izquierda, con gran apoyo social y que se imponga a la oligarquía de los mercados>>.

Hay otros muy significativos hechos recientes, referidos en este caso a la justicia internacional, que me parece pertinente mencionar. Para comenzar, la determinación y rapidez con las que está actuando la Corte Penal Internacional, bajo la conducción del fiscal Luis Moreno Ocampo.

El último ejemplo es la orden de detención, el pasado 27 de junio, al coronel Gadaffi por las matanzas de civiles. Hubo sorpresa general con la velocidad de esta decisión, avalada por el propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Según varios analistas, se acabó la pasividad burocrática y la connivencia que había acompañado a la CPI, que ahora parece dispuesta a administrar justicia internacional con mayúsculas.

A propósito de este hecho, el juez Baltasar Garzón sostuvo que hoy en día solo la extrema derecha, que banaliza el problema de los derechos humanos y esgrime siempre razones nacionalistas o diplomáticas, se opone a la aplicación de la justicia internacional. Son decisiones de alcance universal, insiste Garzón, que conducirán indefectiblemente a la detención y enjuiciamiento de los responsables.

No es muy claro cómo estas normas y jurisdicciones aplicarían en un caso tan singularmente complejo como el colombiano, pero es importante reconocer cuál es la tendencia en el mundo.

Por lo pronto, vale la pena ver el ejemplo de lo sucedido en el contexto de la antigua Yugoslavia, con la detención y condena de gobernantes y generales serbios. Caso muy dicente ha sido la captura y extradición a la Haya en mayo del general serbio Ratko Mladic, que enfrenta un juicio por crímenes de lesa humanidad. Al mismo tiempo, algo también dicente, que el presidente serbio Boris Tadić, pida disculpas en nombre de su nación por las masacres perpetradas por tropas serbias en Croacia y Bosnia. Y en los mismos días, aún más dicente, que Holanda ha sido declarada culpable ante los tribunales internacionales de la muerte de familias bosnias musulmanes a manos de los serbios. Esto, debido a la inacción de los cascos azules de ese país, integrantes de las fuerzas de la ONU, que no utilizaron sus armas para impedir una masacre inminente. Holanda, como país, debe indemnizar a las familias bosnias que dejó fusilar impunemente.

Todo lo que aún sucede en esa región del mundo es parte de un complejo proceso global de autocrítica, reconciliación y reparación. Y estoy de acuerdo en este sentido, con lo que planteó Alfonso Cano a comienzos de año, de que el Estado colombiano debe reconocer su responsabilidad histórica en la violencia política que ha sufrido nuestro país. Y ha comenzado a hacerlo, como se vio en días pasados en El Salado.

También pienso que las Farc deben reconocer su cuota de responsabilidad. Y, todos, pedir perdón a las víctimas.

Once años después de haber entablado demanda contra los soldados holandeses, el joven bosnio que era su traductor oficial y que presenció la muerte de su madre, dijo lo siguiente tras conocerse el veredicto: <<creo que la justicia debería componer un paquete en el que cupiera el castigo del culpable, la compensación de las víctimas, el reconocimiento público de lo sucedido y la aceptación del sufrimiento>>.

Pero suficientes referencias externas. Tenemos que aprovechar estos dos días para hablar entre nosotros de lo nuestro. Claramente, sin rencores ni prejuicios, y averiguar si estamos de acuerdo en que existe una excepcional ventana de oportunidad. Y si podemos, conjuntamente, construir un marco para el diálogo, con procedimientos y reglas del juego mutuamente acordadas.

Estamos aquí para eso. Para compartir con ustedes la visión de esta ventana y saber cómo la ven. El Gobierno no está aquí por debilidad o necesidad. Tampoco para exigirles ni pedirles nada, sino porque nos importa como colombianos que dejemos de matarnos y logremos una <<salida civilizada al conflicto social-armado>>, para hablar en los términos del reciente comunicado de las Farc.

Estamos aquí por el interés de saber si ustedes creen que existe esta oportunidad y si podríamos avanzar hacia conversaciones distintas de las del pasado. Mirar hacia el futuro, a ver si hay un terreno común.

No tiene sentido, en todo caso, volver sobre viejas recriminaciones mutuas. Pero tampoco iniciar diálogos sobre las mismas bases del pasado. Repetir experiencias o procesos como los vividos durante las administraciones Betancur, Barco, Gaviria, Samper o Pastrana, no parece una opción. Sería como si nada hubiera cambiado y no aprendiéramos las lecciones de la historia.

Ahora bien, tradicionalmente las Farc han concebido los diálogos con el Estado como otra forma de lucha, como una oportunidad para oxigenarse políticamente mientras se fortalecen militarmente. Podemos presumir que siguen en lo mismo, porque no hay indicios de lo contrario. Pero la esperanza que hoy nos anima es la de que aquí logremos vislumbrar algo diferente.

Si es así, no debemos perder el tiempo. Porque, insisto, la situación jurídica internacional apremia y la política interna nos exige, a ambos, decisiones audaces y oportunas. Hablemos entonces de cómo vemos, ustedes y nosotros, las oportunidades y dificultades. Si debe el presidente, en el caso nuestro, gastar su capital político en este empeño, por ejemplo. Y si hay coincidencias, acordar cuál podría ser el calendario y los procedimientos para llegar a ese eventual marco de negociación. Identificando si acaso temas estructurales de fondo, pero entendiendo que este no es el momento de abordarlos en detalle.

Ustedes tiene una historia de lucha que forma parte de la historia de Colombia. Para bien o para mal. Lo innegable son sus casi cincuenta años de existencia y las bases sociales que han logrado allí donde el Estado ha brillado por su ausencia. Pero tampoco se pueden desconocer lo que el Estado colombiano ha evolucionado, ni el hecho de que este gobierno tiene el propósito de hacer presencia en todos los rincones del territorio nacional.

Hoy, repito, hay más de una conexión entre lo que ha sido la agenda histórica de las Farc y lo que este gobierno quiere llevar a cabo. Pero más que las agendas de uno u otro, es la del país la que cuenta. La de no más despojo, no más corrupción, no más copamiento del Estado por narcos y paras.

Las Farc han desaprovechado oportunidades históricas para avanzar su agenda, como la que ofreció la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y, diez años después, el despeje del Caguán. Entretanto se consolidaron fenómenos como el paramilitarismo y sobretodo el narcotráfico, que todo lo degradó y contaminó, haciendo difíciles las salidas negociadas al conflicto armado.

Que no los deje otra vez el tren de la historia. Más tarde será más difícil. Cada vez más difícil.

Miremos alrededor. Cómo no ver que el escenario es el de la lucha política abierta y de cara al pueblo. Cuando hay las garantías y el pueblo puede expresarse libremente en las urnas, pues ahí vemos los resultados. Basta ojear al vecindario y ver a ex guerrilleros en el poder; en Brasil, El Salvador, Nicaragua y Uruguay. En Colombia, en el senado o en la alcaldía de la capital. El estigma no es haber empuñado las armas. Es no saber deponerlas.

Estamos aquí, en fin, para averiguar si hay posibilidad de llegar a esa <<salida civilizada>> al conflicto armado que ustedes mencionan en su comunicado del 27 de mayo. Queremos creer que sí. Y estamos seguros de que el momento es ahora.

No lo dejemos pasar. La futura generación de colombianos no nos lo perdonarían.